



La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, que por parte de la consultante se facilite a los intervinientes en el proceso de escolarización de los datos contenidos en el expediente y que incluyen datos de carácter personal referidos a otros solicitantes, teniendo en consideración lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero de 2007 de la Consejería de Educación de citada, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios, en la redacción dada a su artículo 32.3 por la Orden de la misma Consejería de 29 de febrero de 2009, según el cual una vez publicada la puntuación atribuida a cada solicitante “En los centros docentes públicos y en los privados concertados, a solicitud de las personas interesadas se pondrán de manifiesto los expedientes para que puedan formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, por plazo de diez días hábiles, contados a partir del 12 de abril de cada año”.

Debe tenerse en cuenta que el texto que acaba de reproducirse reemplaza el previsto en la redacción originaria de la Orden, en que se señalaba que “Durante diez días hábiles contados a partir del 12 de abril de cada año se procederá, en el caso de los centros docentes públicos, al trámite de audiencia. Igualmente, en los centros docentes privados concertados, durante este mismo plazo, los solicitantes podrán formular ante la titularidad las alegaciones que estimen convenientes”.

Dicho esto, la transmisión así planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a) cuando exista una norma con rango de Ley que autorice la cesión de los datos.

Como se ha indicado, el consultante se refiere al acceso al expediente por parte de quienes hayan solicitado la escolarización de sus hijos o tutelados en el centro escolar, a fin de que por los mismos puedan, según indica el propio precepto en su redacción actual los interesados puedan formular las

alegaciones y aportar los documentos pertinentes para la defensa de su derecho, ostentando así los solicitantes la condición de interesados en el procedimiento de admisión.

El artículo 35 de la Ley 30/1992 reconoce en su apartado a) el derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas “a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”.

La condición de interesado en el procedimiento administrativo viene recogida en el artículo 31 de la citada Ley 30/1992, cuyo apartado 1 dispone que:

*“Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:*

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.*
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.*
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.”*

Pues bien, en el presente caso se indica en la consulta que la solicitud se refiere al expediente administrativo de un proceso de concurrencia en el que participaría el solicitante, ostentando obviamente en el mismo la condición de interesado, por lo que debe considerársele reconocido el derecho establecido en el artículo 35 a) de la Ley 30/1992.

De este modo, la previsión contenida en el citado precepto supone una excepción legal al consentimiento del interesado para la comunicación de sus datos de carácter personal, de modo que la cesión planteada en la consulta se encontraría amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

A su vez, el artículo 84.1 de la Ley 30/1992 dispone que “Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5”, referido a determinadas excepciones al derecho de acceso a archivos y registros que no son de aplicación en este caso, añadiendo el artículo 84.2 que “los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes”.



A la vista de lo que se ha venido indicando, y siendo el titular del centro privado concertado el competente para resolver sobre el proceso de admisión de alumnos en el centro, tal y como se deriva de la propia norma autonómica analizada, la cesión planteada en la consulta se encuentra amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con los artículos 35 a) y 84 de la Ley 30/1992.